

Alianzas dominantes versus alternativas sociales y políticas Una mirada de la reconfiguración del bloque hegemónico colombiano en el siglo XXI.

Liliana Pardo Montenegro.

Cita:

Liliana Pardo Montenegro (2012). *Alianzas dominantes versus alternativas sociales y políticas Una mirada de la reconfiguración del bloque hegemónico colombiano en el siglo XXI*. Espacio Crítico, 16, 109-130.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/publicaciones/6>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pQ6r/5qK>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

**Alianzas dominantes
versus alternativas sociales y políticas**

Una mirada de la reconfiguración del bloque hegemónico
colombiano en el siglo XXI

Liliana Pardo Montenegro

Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Maestranda en Estudios Políticos
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Consultora - Investigadora Externa, UBACyT

Resumen

Los acontecimientos de la historia reciente permiten visualizar las fracciones de poder político en las alianzas partidarias que conforman el bloque hegemónico del gobierno representado por el presidente Juan Manuel Santos, a la luz de los intereses expresados en el proyecto de la “Unidad Nacional”. Para indagar este asunto, proponemos reseñar un breve panorama de la dinámica del sistema de partidos colombiano desde mediados del siglo XX hasta la Reforma Política del año 2003, revisar algunos aspectos teóricos de los partidos políticos y de los movimientos sociales, y con esto, analizar el tejido de las alianzas partidarias de los comienzos del siglo XXI en Colombia y las alternativas sociales y políticas a la coalición de gobierno.

Los partidos políticos en Colombia

Los partidos políticos en Colombia tienen una historia arraigada en el bipartidismo tradicional, que data, con sus alternancias hegemónicas, desde la creación del Partido Liberal Colombiano en el año 1848 y el Partido Conservador Colombiano en el año 1849 hasta la reforma constitucional de 1991. En la división temporal de la dinámica partidaria a partir de la segunda mitad del siglo XX, se pueden resaltar cuatro momentos: 1) el sistema de consociacionalismo del Frente Nacional (1958-1974) como alternancia pactada entre los dos partidos dominantes y la limitación de participación y aniquilación de otras fuerzas políticas; 2) las luchas internas entre fracciones liberales desde 1974 hasta la asamblea constituyente en 1990; 3) la dinámica de partidos de la constitución de 1991 hasta la reforma política del año 2003; y en el análisis del siglo XXI agregamos como último momento, 4) la implementación de la reforma política desde el año 2003, en el supuesto paso a un multipartidismo moderado y una reordenación institucional del sistema partidario colombiano.

El bipartidismo colombiano fue erosionándose durante el contexto de violencia que vivió Colombia apartar del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal radical, en 1948, y una progresiva crisis de legitimidad del sistema político bajo el control de los partidos tradicionales. En este sentido, David Roll señala que cuando los partidos tradicionales se constituyeron en “protagonistas exclusivos de la historia política, la crisis política del bipartidismo se tradujo automáticamente en la crisis general del sistema político” (Roll, 2002: 57). Así la caída de los partidos tradicionales producto del clientelismo en el Frente Nacional produjo también una apatía ciudadana a la política electoral aunque, ejerciendo en la práctica en la década de los setenta una amplia representación de movilización social en el Paro Cívico Nacional de 1977 y en marchas campesinas que posicionaron una fuerza política en las calles. Esta década ha sido caracterizada por Francisco Gutiérrez (2007) como la composición política de nuevas alianzas de “élites agrarias, narcotraficantes y paramilitares” y la transformación de las prácticas políticas en el auge de nuevos actores vinculados a la economía ilegal y los circuitos de la guerra.

Al terminar el Frente Nacional, la fuerza política predominante pasó al Partido Liberal, en toma de posesión de personalismos regionales. La elección de Alfonso López Michelsen (1974-1978) con su lema “Mandato claro” y su frente disidente el Movimiento Revolucionario Liberal, puso en evidencia las luchas internas de los liberales hasta la asamblea constituyente en 1990. Durante este periodo, por tendencia liberal se llevaron a cabo los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) quien ejecuto la política represiva del Estatuto de seguridad nacional; y el de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) que introdujo el esquema Gobierno-oposición y dio el primer paso hacia las reformas neoliberales y los procesos de paz con los grupos guerrilleros M-19, Quintín Lame, EPL (Ejército Popular de Liberación), y PRT (Partido Revolucionario de los trabajadores). Por parte del partido conservador, gobernó Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), gobierno que decretó la amnistía para los grupos guerrilleros y estableció la Ley 85 de 1985 por medio de la cual se reglamentaba el Estatuto Básico de los Partidos.

En este proceso de nueva alternancia de fuerzas políticas en elecciones, la dinámica de los partidos políticos y del sistema de partidos se ha descrito como el paso a un sistema bipartidista atenuado, conformado por los dos partidos tradicionales y por “terceras fuerzas” de todo tipo y tamaño (Pizarro, 2002; y Ungar y Arévalo, 2004). Es por esto, que en el modelo de bipartidismo atenuado se hace referencia a la creación de “micro-empresas electorales” para designar la “atomización personalista” de las fracciones de los partidos tradicionales que protagonizó el sistema de partidos en Colombia.

Tal atomización en liderazgos personalistas y fraccionalismo interno del bipartidismo, en contravía al propósito de la Constitución de 1991 de brindar las garantías para el desarrollo de elecciones y para que los partidos y movimientos políticos tuvieran plenas libertades legales de presentar candidatos a elecciones nacionales y para llevar a cabo sus actividades políticas en elecciones (Giraldo: 127), fue lo que creó una suerte de “micro-empresas electorales” con resultados de votos favorables a las fracciones del Partido Liberal.

Sin embargo, esta noción no menciona el proceso de violencia política que sufrieron las “terceras fuerzas” al lanzar candidaturas democráticas a la presidencia de la República, dado que en la apuesta electoral fueron asesinados los líderes más sobresalientes para la construcción de una alternativa de poder distinta a la política de los partidos tradicionales. En 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato a la presidencia en 1986 por la Unión Patriótica; en 1989, fue asesinado Luis Carlos Galán, candidato a la consulta interna del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1990; 1990, fueron asesinados Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19; y Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica. Esta dinámica de violencia política es un elemento constante en la historia de Colombia, pero en acuerdo se señala que:

Si bien los asesinatos, las amenazas, los atentados y los secuestros de candidatos, concejales, alcaldes, diputados y congresistas por parte de guerrillas y paramilitares no son un fenómeno nuevo, se han hecho aun mucho más notorias en los últimos cuatro [2000-2004] años. La ciudadanía también es víctima de intimidaciones que se expresan, por un lado, en la obligación de votar por determinado candidato y, por el otro, en el impedimento a los ciudadanos del libre ejercicio del sufragio. 'Estas presiones de los actores armados, particularmente de las autodefensas, parecen haber obedecido a un intento de penetrar las estructuras nacionales de representación política' (García y Hoskin, 2002: 230-231. Tomado de: Ungar y Arévalo, 2004: 65).

La década de los noventa y los primeros años del siglo XXI en Colombia, se ha caracterizado por una alianza de los partidos tradicionales, los actores armados del paramilitarismo y los intereses económicos en megaproyectos transnacionales. En la atomización del sistema de partidos, el Partido Liberal Colombiano con su fraccionalismo interno, obtuvo el poder ejecutivo durante dos periodos de gobierno, el de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) reconocido por la implementación directa de las políticas neoliberales, la apertura del libre comercio y la política de internacionalización de la economía; y el de Ernesto Samper (1994-1998) que planteó en el discurso de su gobierno la distribución de los recursos de forma equitativa y en la práctica continuo las políticas del neoliberalismo.

Las fracciones internas conservadoras fueron unificadas por la “Alianza para el Cambio” que congregó al Movimiento “Nueva Fuerza Democrática” y al “Movimiento de Salvación Nacional” en la elección de Andrés Pastrana (1998-2002). El lema de su Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz” marcó su política del frustrado proceso de diálogo con las FARC para un acuerdo de paz. En el año 2001 decretó la Ley anual del Presupuesto, que dio lugar al despido masivo de trabajadores estatales y la paulatina privatización del sector público, en consonancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional – FMI. Además, durante su periodo de gobierno fue aprobado el Plan Colombia, como condicionante económico-militar de las relaciones y acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

En este mismo año 2001, se llevó a cabo el “Pacto de Ralito” un acuerdo de políticos y jefes de los bloques paramilitares el cual se propuso “penetrar las estructuras nacionales de representación política”. Así, el fenómeno del siglo XXI, dado en la elección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por el movimiento “Primero Colombia”, una alianza de conservadores, liberales e independientes, sintetizó la erosión del sistema partidario tradicional de Colombia y el surgimiento de las nuevas alianzas con intereses políticos y económicos.

El ex presidente Álvaro Uribe fue un candidato disidente del Partido Liberal, apoyado por el Partido Conservador que disputó en las urnas frente al oficialista liberal Horacio Serpa. En los recortes de prensa inmediatos a las elecciones presidenciales de 2002, podía leerse la propuesta de Álvaro Uribe del “Gran Pacto de Unidad Nacional” como un logro del candidato independiente para convertirse en “jefe natural de los liberales y conservadores” (Roll, 2002: 305-307), aunque durante el ejercicio de Gobierno de Uribe, el Partido Liberal le declaró oposición parlamentaria¹.

Las “terceras fuerzas” de ese momento, el Movimiento “Sí Colombia” de Noemí Sanín tendió a desaparecer; y el Polo Democrático Independiente con la candidatura de Luis Eduardo Garzón, tuvo el reto de organizar y consolidar una oposición política, que posteriormente se agruparía en la candidatura presidencial del Polo Democrático Alternativo con Carlos Gaviria Díaz, para el año 2006, obteniendo la segunda votación nacional, en las elecciones que le dieron la reelección a Álvaro Uribe.

Respecto a la Reforma Política Constitucional del año 2003², ésta tuvo como uno de sus propósitos, reducir el personalismo y fomentar la agrupación de los partidos políticos, en este sentido, los requisitos de creación de Partidos quedaron plasmados en el Artículo 108 de la reforma, así:

El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán

¹ Al respecto ver: Comunicado. La Bancada liberal decidió marginarse del debate sobre las reformas a la Justicia y a la Política. Estos son sus argumentos. Martes 26 Agosto 2008; y Comunicado. El director del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, respondió a las acusaciones del Presidente Álvaro Uribe, sobre la supuesta alianza del ex mandatario con los Pepes para combatir a Pablo Escobar. Martes 26 Agosto 2008. Disponibles en: www.semana.com

² El resultado de las reformas al sistema de partidos se consignó en leyes decretadas durante el periodo de 1994 al 2005. Entre estas, las leyes 130 de 1994 (Ley Estatutaria sobre partidos políticos), 134 de 1994 (Ley Estatutaria de mecanismos de participación), 649 de 2001 (reglamentación de la participación política de grupos étnicos, minorías políticas y colombianos en el exterior), 892 de 2004 (voto electrónico), 974 de 2005 (Ley de Bancadas) y 996 de 2005 (reglamentación de la reelección presidencial); y de los actos legislativos modificatorios de la Constitución 01 de 2003 (Reforma Política) y 02 de 2004 (Reelección Presidencial). Una descripción sintetizada de los contenidos de cada una de estas leyes puede leerse en el trabajo elaborado por Fernando Giraldo (2007: 127-128).

obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso (Tomado de: www.secretariasenado.gov.co).

Aunque, la postura de Ungar y Arévalo (2004) frente a tal Reforma, resume que ésta disminuyó relativamente el número de listas y la fragmentación de las terceras fuerzas, la feria de avales y la ineficiencia representativa de los partidos quedó sin resolver. Por lo mismo, la implementación de la Reforma, no ha concretado el paso a un multipartidismo moderado y una reordenación institucional del sistema partidario colombiano, tan sólo ha obligado al agrupamiento de movimientos políticos para cumplir con los requisitos de número de votación exigidos para otorgar la personería jurídica. Por consiguiente, en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se consolidó un sistema de gobierno presidencialista (Sánchez, 2005), donde lo único que unió a facciones tan diversas fue la figura del presidente Álvaro Uribe (Ungar y Arévalo, 2004: 65).

En resumen, la caracterización de los partidos políticos en Colombia está dada por un alto grado de fragmentación y personalismo, un rechazo generalizado de la población al sistema de partidos, una deslegitimación del régimen político, y como resultado una descomposición social en aumento, al no tener una representación partidaria organizada para posicionar las demandas y necesidades de la población en una fuerza política con vocación de poder y compromiso de transformación.

Aspectos teóricos de los partidos políticos, los sistemas de partidos y los movimientos sociales y políticos

La crisis de legitimidad de los partidos políticos y los sistemas de partidos tradicionales es materia de estudio de variados autores. Bernard Marín se preguntó “si las diferentes evoluciones que afectan actualmente la representación no indican en realidad la aparición de una tercera forma de gobierno representativo” (Marín, 1992: 11). Entre estas nuevas formas de gobierno, la “democracia de lo público” es una estrategia electoral de los candidatos y de los partidos basada en la construcción de imágenes personalistas, donde el lazo representativo responde principalmente a dos causas: las nuevas técnicas de comunicación y el papel creciente de las personalidades de los gobernantes. En este cambio se pierde lo que se había comprendido como “democracia de partidos” y se pasa a la tendencia de elecciones por coalición para acceder al gobierno, dado que la fragmentación de los personalismos no permite componer una mayoría absoluta en un solo partido o movimiento político.

Asimismo, la crisis de legitimidad de los partidos políticos y la progresiva pérdida de identidad hacia los partidos de masas, puede indicar un regreso a la noción de elección en la idea de un gobierno representativo de “notables”. La definición que nos presenta Marín, nos recuerda que:

La elección ha sido inventada como el medio de llevar al gobierno a individuos que

gozan de la confianza de sus conciudadanos. Los candidatos serían individuos que, por su red de relaciones locales, su notoriedad, la deferencia de la que gozan, suscitan la confianza de aquellos que viven próximos o que comparten sus intereses (Marín, 1992: 20).

En tanto, esta noción durante el siglo XX pasó de la confianza del candidato a la confianza en la organización de partidos de masas. Se observa nuevamente una tendencia a la “personalización” del poder, el debate público transmitido por los medios de comunicación ha impulsado la actitud personalista de los candidatos como un determinante de las elecciones.

En este mismo sentido, Ángel Panebianco (1995) propone el concepto de “partido profesional electoral”, reconociendo que en estos “el elector se hace más independiente, más autónomo, menos controlable y menos expuestos a las presiones de las «oligarquías» descritas por Michels, pero también más sólo y desordenado” (Panebianco, 1995: 510). La evolución de este tipo de partidos puede resultar en la disolución de los partidos como organizaciones y en la transformación de los regímenes políticos en una competencia de empresarios políticos independientes.

El retorno a las concepciones ideológicas, de retomar principios rectores en nuevos contextos, no tiene claridad de “cómo podrían llegar a reconstruirse por esta vía unas determinadas identidades colectivas ni a qué tipo de soluciones político-organizativas podrían ir ligadas” (Panebianco, 1995: 511). La posibilidad de innovar en política por nuevas organizaciones que entren en competencia con los partidos tradicionales, requiere de la participación de “fuerzas «auténticamente revolucionarias»”. Panebianco encuentra las pautas para el futuro de los partidos políticos en dos características de tipo organizativo, según el papel que asuman los movimientos políticos: regímenes democráticos o autoritarismos inéditos. Para el caso en estudio, vale tener en cuenta el registro del tipo de organización política que se viene configurando en Colombia, según la siguiente alusión:

Hoy por hoy, los candidatos a los cargos de representación popular se presentan por sí mismos, organizan sus equipos de campaña, diseñan sus estrategias electorales, recolectan fondos de manera autónoma y, los partidos, simplemente reparten avales a diestra y siniestra [...] hoy los candidatos eligen al partido que les concederá el aval respectivo: es decir, estamos entrando en una era dominada por verdaderos “partidos de alquiler”, en los cuales no es el partido que selecciona a un candidato, sino que son los candidatos quienes seleccionan a un partido (Pizarro, 2002: 8-9).

En esta proyección del futuro de los partidos políticos, se pueden revisar las nociones de “Partido Cartel”, “Catch al party” o “partidos atrapados” (Tcach, 1993; Katz y Mair, 1997). Katz y Mair (1997) relacionan al “Partido de masas” y la emergencia de los “Partido Cartel” con una idea fija de democracia y reconocen en estos modelos etapas de un proceso continuo de cambios. La definición que proporciona de los “Partidos de masas”, puede leerse en seguida:

“En el arquetípico modelo de partido de masas, las unidades fundamentales de la vida política son grupos sociales predefinidos y bien concretos, asociación en la cual están ligados todos los aspectos de la vida del individuo (Neumann, 1956:

especialmente 403). Como la política se trata principalmente de la competencia, el conflicto, y la cooperación de estos grupos, los partidos políticos son los órganos a través y en consecuencia de las cuales, sus miembros participan en política, hacen demandas al estado, y finalmente intentan capturar el control del estado mediante la ubicación de sus propios representantes en las oficinas claves. Cada uno de estos grupos tiene un interés, el cual es articulado en el programa de “su” partido. Este programa no es simplemente un paquete de políticas sino que es un todo coherente y lógicamente conectado. De aquí que la unidad partidaria y la disciplina no sean solamente ventajosas, sino también normativamente legítimas. Esta legitimidad depende, a su vez, del involucramiento popular directo en la formulación del programa del partido. Desde una perspectiva organizacional, esto implica la necesidad de una extensa organización de los miembros en ramas o células para proveer vías por medio de las cuales las masas ingresan sus demandas en el proceso partidario de creación de políticas, al igual que para la supremacía de partidos extra-parlamentarios, particularmente encarnados en el congreso partidario” (Katz y Mair, 1997: 2).

En los “partidos de masas” según esta definición, la elección corresponde a “cuotas diferenciales de movilización” y un “prospectivo control popular de la política”, esto es, la competencia electoral está dada más por la movilización y asistencia social, que por las transformaciones concretas que puede ejercer la política en las condiciones socioeconómicas de vida de la población en general. En la primera mitad del siglo XX se evidenció un incremento del nivel de compromiso con la base social y por tanto se creyó que los partidos de masas serían el modelo futuro a practicar por los partidos representantes de otros intereses y segmentos de la sociedad (terratenientes, industriales, etc.) los cuales eran crecientemente minorías permanentes para las elecciones. Sin embargo, Katz y Mair, toman “lo que Kirchheimer (1966) llamó 'partido atrapa-todo'” para indicar el desafío que tenían los partidos políticos al representar sectores sociales predefinidos, resaltando que:

En primer lugar, los comienzos de una erosión de las fronteras sociales tradicionales a fines de los 50 y 60 implicaron un debilitamiento de anteriores identidades colectivas altamente diferenciadas, haciendo menos fácil identificar distintos sectores del electorado y asumir intereses compartidos en el largo plazo. Segundo, el crecimiento económico y la incrementada importancia del estado de bienestar facilitaba la elaboración de programas que no necesariamente seguían siendo divisorios o partidarios, sino que podía ser presentado para servir los intereses de todos, o casi todos. Tercero, con el desarrollo de los medios masivos de comunicación, los partidos líderes comenzaron a disfrutar de una capacidad para atraer al electorado libre, un electorado conformado por votantes que estaban aprendiendo a comportarse más como consumidores que como participantes activos (Katz y Mair, 1997: 3).

El resultado del análisis hace proponer un nuevo modelo de partido y una nueva concepción de democracia. En la primacía del personalismo de los candidatos por encima de la organización partidaria y del partido por encima de su base social. Este modelo ya no responde a la movilización pero tampoco contiene compromisos de transformación, rompe con la relación [partidos]-[sociedad civil] y toma como nuevo condicionante la relación [partidos]-[Estado], convirtiendo a la política pública como modificante

de los intereses a largo plazo de los grupos electorales ante los que el partido electo es responsable y dejando a la sociedad civil aislada o en autonomía de autoconvocarse en organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, etc., sin vocación de toma del poder del Estado, mientras que el Estado es acaparado por los partidos electos, por las reglas que éstos impulsan y por la financiación que el Estado les proporciona para su permanencia. En relación a esto, se ha escrito que:

“Los partidos políticos colombianos parecen haber formulado históricamente sus proyectos pensando más en el Estado que en la sociedad. Entonces, antes que representantes de intereses, más bien han sido legitimadores recurrentes del sistema político, en la medida en que han sido los principales artífices del mecanismo de legitimación básica: el proceso electoral. Pero adicionalmente, cuando el sistema político atraviesa alguna situación de crisis, los partidos políticos, a través de sus dirigentes y casi siempre de manera simbólico-discursiva, comienzan a respaldar y reforzar la precaria legitimidad del mismo. Por ello se puede afirmar que, si bien en teoría los partidos políticos pertenecen a la sociedad, en el caso colombiano han cumplido un papel de mayor relevancia en relación con el Estado” (Vargas, 2011: 118).

Los partidos tradicionales que se habían ajustado al esquema de “organizaciones que parecían partidos de masas en forma (miembros regulares, sucursales, congreso partidario, prensa partidaria), pero que en la práctica a menudo continuaban enfatizando la independencia del partido parlamentario” (Katz y Mair, 1997: 7), no tuvieron un sector de clase definido en sus seguidores, se dispusieron a “hacer apelaciones más amplias, tratando de captar el apoyo de todas las clases”, apareciendo en las fracciones internas de los partidos tradicionales la tendencia al modelo de partido “atrapa-todo”, que “en vez de enfatizar la homogeneidad social, el partido acepta miembros donde sea que los encuentre, y además recluta miembros sobre la base de un acuerdo de políticas más que sobre la base de una identidad social” (Katz y Mair, 1997: 8).

Desde esta perspectiva, las alianzas partidarias corresponden a los intereses en juego en el momento de las elecciones, “las selecciones electorales son elecciones entre equipos de líderes más que una competencia entre agrupamientos sociales cerrados o ideologías fijadas” (Katz y Mair, 1997: 9), en la medida en que los intereses de estos personalismos estén en una coalición, o en un “cártel”, que garantice que todos los partidos comparten recursos, el “Gran pacto de la unidad nacional” también pervive. Los “partidos cártel” garantizan que todos los partidos con mayoritaria votación accedan a la repartición del gobierno, por esto mismo, las campañas electorales se convierten en “capital intensivas, profesionalizadas y centralizadas”, apoyadas financieramente en las subvenciones y demás beneficios otorgados por el Estado. Es muy gráfica la alusión que hacen del “Partido cartel”, al decir que “es posible imaginarse al partido manejando todos los negocios desde un cuartel central, subdividiendo simplemente su lista de correo según circunscripción, región, o ciudad cuando un grupo de candidatos debe ser seleccionado o cuando deben ser aprobadas políticas locales” (Katz y Mair, 1997: 16).

En este paso de los 'partidos de notables', los 'partidos de masas', los 'partidos atrapa-todo' a los 'partidos cartel', la concepción de la democracia “se transforma en un servicio provisto a la sociedad civil por el estado. La clase política necesita ser renovada, y las elecciones proveen un ritual pacífico por el cual esto puede ser logrado” (Katz y Mair, 1997: 17). Las elecciones requieren de la competencia de partidos

políticos que legitimen el régimen político y son los partidos que están en el Gobierno quienes definen las reglas del juego democrático para garantizar su permanencia en el poder del Estado.

La diferencia de los 'Catch al party' europeos de la versión latinoamericana, la resalta Cesar Tcacht (1993) al revisar que los partidos atrapa-todo en Europa surgieron en un auge de crecimiento económico, en el otorgamiento de derechos universales por parte del Estado de Bienestar, mientras tanto, en Latinoamérica no se llegó a la consolidación de los principios del Estado-moderno y económicamente estos transitaban por un proceso paulatino de reducción del gasto público y progresiva privatización. En este sentido, la quiebra de los incentivos colectivos y el “sobredimensionamiento por contraste” de los incentivos selectivos, suponía en América Latina el cumplimiento de una regla configurativa: “evitar la sobrecarga de demandas al Estado”. Aunque, la nueva relación de los partidos-cartel no precisa el cumplimiento de derechos universales, sino de la organización de empresas privadas asociadas a las fracciones partidarias de gobierno para ejecutar concesiones y contratos del Estado.

En esta revisión teórica, los partidos políticos y los sistemas de partidos, no responde a un enfoque de las alianzas partidarias, ni confronta las relaciones de fuerza que se enfrentan con la estructura de clases y los conflictos sociales que se establecen en el proceso de imponer la “normalización” económica y política por el gran empresariado. En el caso colombiano, el 'control hegemónico' que ejercieron los partidos tradicionales durante el siglo XX y el que vienen ejerciendo ciertas fracciones internas de los rezagos del liberalismo en apoyo del partido conservador, permite evidenciar que en Colombia el 'bloque de poder' se constituyó dentro de una 'alianza de clases' propietarias, para el impulso de determinadas políticas de reducción del Estado. Las distintas fracciones de clases dominantes mediante los partidos políticos tradicionales cumplieron un importante papel en la consolidación del económico neoliberal.

Por su parte, los movimientos sociales y políticos alternativos o denominados “terceras fuerzas”, son la hibridación de fenómenos sociales complejos y diversos. Mauricio Archila Neira (2005) estudió los movimientos sociales a partir de una explicación histórica de la lucha de clases que motivó la protesta social en Colombia entre 1958 y 1990. En este estudio, el balance de las teorías sobre la acción colectiva concluye en que:

la acción colectiva en Colombia, si bien incorporó parte del imaginario de la lucha de clases, tanto en la forma tradicional, referida a la producción, como en una versión policlasista que incluye también el consumo, no fue la guía de su comportamiento. Ello se debió a que esa lucha de clases se contempló a través del prisma guerrillero —sobre la base de enemistades radicales aún con los 'otros' cercanos—, práctica que no coincidía con el ejercicio cotidiano de muchos actores y de los mismos militantes de la izquierda social (Archila, 2005: 329-330).

Según lo anterior, este autor propone que los movimientos sociales se organizan en relación a la [sociedad civil]-[Estado]. La función de creación de consenso está en la disputa de fuerzas al interior de los movimientos sociales y de estos en su relación con el Estado. Así, la acción colectiva de los movimientos sociales tampoco cuenta con identidades de clase definidas, dado que esta no corresponde

a una homogeneidad de la contradicción capital-trabajo, sino a la diversidad cultural que caracteriza la composición social del país (comunidades, afrodescendientes, campesinos, reivindicaciones de género, etc.). Esta fragmentación de luchas, hace que el motor de exclusión e inequidad que les es común se disperse en diferentes procesos de resistencia y movilización, debilitando su capacidad de trascender de lo particular a lo general (Archila, 2005: 470).

Por otro lado, Clauss Offe estudió la relación [sociedad civil]-[Estado] en tanto cuestionamiento a los canales institucionales (las elecciones o la representación parlamentaria) como vía adecuada y suficiente de comunicación política. En este empleó término de “paradigma político” para analizar la “nueva política” de los nuevos movimientos sociales de Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX. El problema central que resalta de la democracia moderna es mantener la diversidad y la unidad al interior de la sociedad civil, problema que “encuentra una solución más fácil en sistemas políticos en los que la diversidad de fondo a resolver es una diversidad de intereses; la solución es, sin embargo, más difícil en sistemas con el problema adicional de lograr una mediación entre valores o modelos culturales diversos” (Offe, 1996: 166).

Los métodos con los que nuevo “paradigma político” o “nueva política” de los movimientos sociales aborda los conflictos de la configuración de valores son tomados de la definición del “paradigma del modo de vida” (Raschke, 1980. En: Offe, 1996), para referir a la politización de cuestiones que no entran en la teoría liberal de lo público y lo privado, sino entran en un espacio de política no institucional referente estilos específicos culturales, tradicionales y de práctica de vida, que logran un evidente impacto político debido a sus éxitos cuantitativos de movilización. Estos movimientos, nos dice Offe, poseen unos contenidos dominantes, estos son:

el interés por un territorio (físico), un espacio de actividades o “mundo de vida”, como el cuerpo, la salud e identidad sexual; vecindad, la ciudad y el entorno físico; la herencia y la identidad cultural, étnica, nacional y lingüísticas; las condiciones físicas de vida y la supervivencia de la humanidad en general (Offe, 1996: 174).

Los contenidos de mayor trascendencia en la composición social son “la autonomía y la identidad (con sus correlatos organizativos, tales como la descentralización, el autogobierno y la autodependencia)”, características que son reivindicadas en especial por las minorías étnicas en Colombia, y que fueron contemplados en la reforma constitucional de 1991. Los planteamientos de Offe coinciden con los Archila en tanto que los actores de los nuevos movimientos sociales, no refieren al código político establecido (izquierda/derecha, liberal/conservador, etc.) ni a los códigos socioeconómicos parcialmente correspondientes (tales como clase obrera/clase media, pobre/adinerado, población rural/urbana, etc.) (Offe, 1996).

La brecha de los movimientos sociales y los partidos políticos, se caracterizó en Europa occidental por la particularidad que la exigencia de autonomía no se centró en libertades económicas (libertad de producción, consumo y contratación), sino en la protección y preservación de valores, identidades y

formas de vida frente a la imposición política y burocrática de la política tradicional, dado el Estado de Bienestar que se logró durante este periodo. En su lugar, la reivindicación de identidad y autonomía en Colombia, conllevó a protestas sociales con un fuerte carácter organizativo de clase por disputa del poder político y económico que conllevó al surgimiento de guerrillas con identidades de los sectores campesinos, de las comunidades indígenas y de pobladores urbanos y sus líderes estudiantiles. Tras los procesos de desmovilización en la década de los noventa de los grupos guerrilleros M-19, Quintín Lame, EPL (Ejército Popular de Liberación), y PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), la proliferación de organizaciones sociales, asociaciones, federaciones, y demás formas organizativas que congregaron las simpatías de por las figuras históricas que reivindicaban y que se transformaron en las fuentes de inspiración de la nueva generación de movimientos estudiantiles, movimientos políticos indígenas y movimientos que reivindican las luchas de los afrodescendientes.

Así, el conflicto escenificado por una alianza social compuesta por elementos de diferentes clases y de “no clases” Europeo es diferente a la caracterización social de los movimientos latinoamericanos. La dificultad de los movimientos sociales de no contar con formas institucionales para evidenciar su fuerza, éxito, logros y crecimiento, debido a la separación [sociedad civil] / [Estado] se debió, en parte a la deslegitimación del potencial de la política institucionalizada y representativa; sin embargo, en mayor medida, los factores de represión implementados fueron sin duda los que causaron la pérdida de fuerza que tuvieron estos movimientos para llevar a cabo sus propósitos.

La construcción de una nueva teoría política que dé cuenta de la necesidad de integrar los lazos entre [sociedad civil] – [partidos políticos] – [Estado], se enfrenta al dilema de proponer salidas para que los movimientos sociales puedan consolidar sus fragmentadas demandas en un proyecto político con incidencia en la toma de decisiones en los espacios de reconocimiento legítimo a nivel global y a nivel local. En el siglo XXI el tema del medio ambiente, los modos de vida, las identidades étnicas y las reivindicaciones de justicia histórica han tomado un lugar central en la política latinoamericana. El momento de giro político en los gobiernos progresistas pasa por la prueba de llevar a cabo un nuevo “paradigma político” que posibilite la expresión de las demandas de estos movimientos sin la represión de sus protestas y que abra un espacio para que estos puedan incorporarse en la política institucional con el objetivo de disputar democráticamente los escenarios de poder donde son tomadas las decisiones políticas y económicas que a nivel estructural pueden dar respuesta al conjunto de las demandas sociales del presente.

La estrategia extractivista de la nueva fase de capitalismo financiero pretende regresar a este continente a un modelo económico primario-exportador, en una ola neocolonizadora de compra masiva de territorios, concesiones público-privadas y la estrategia de socios estratégicos que proponen el comercio sur-sur entre los Estados-nacionales latinoamericanos y las megacorporaciones de los gigantes asiáticos. Los países de la denominada periferia, sin importar su orientación política, están reviviendo los principios de progreso y desarrollo, justificando la necesidad de entrada de divisas para la recuperación económica de la última crisis mundial. Por esto, es importante revisar lo que se viene tejiendo en Colombia, entre unas alianzas partidarias dominantes, en contra de las alternativas sociales y políticas, con la ejecución de una política de “seguridad democrática” que posibilite llevar a cabo los

megaproyectos, planes y negocios de una política económica de “confianza inversionista” para atraer a los grandes capitales inversionistas.

Las Alianzas partidarias dominantes del Siglo XXI

Los ejes tomados para el análisis de las alianzas partidarias que se han configurado en Colombia en los comienzos del siglo XXI, son: 1) la política económica de confianza inversionista; 2) la recomposición de las clases dominantes en un momento de contradicciones internas y de disputa por la conducción del proyecto político hegemónico; y 3) los cambios en la función del Estado que se vienen presentando en la reglamentación del sistema de partidos y sistema electoral.

En el periodo de reelección del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), se organizó el paso hacia lo que se viene denominando como el “proceso de conversión de Colombia en un país minero y cocalero” (Gutiérrez y Zuluaga, 2011), con el agravante de la caracterización que nos indica que en Colombia la “precariedad de la presencia del Estado [se expresa] en un Estado coercitivo y no en uno que dé respuestas a las carencias y demandas sociales” (Vargas, 2011: 119). Esa forma de Estado neoliberal, ha logrado mantener, en medio de la última crisis capitalista mundial, un gran auge de crecimiento económico, de coerción física hacia las poblaciones rurales y de consenso con las poblaciones urbanas.

La reconfiguración del bloque de poder está dada por el nuevo modelo dominante, que podemos acordar consiste en la “coordinación por parte del centro de diferentes alianzas regionales involucradas en la distribución de rentas a través de redes de agentes políticos, privados e ilegales” (Gutiérrez y Zuluaga, 2011: 114). Esta nueva dinámica está fisurando la hegemonía económica de la región andina y desviando hacia las nuevas regiones de extracción minera. Por esto mismo, el proyecto de reforma al sistema de regalías presentado en el año 2010, busca una distribución de los recursos, una planeación centralizada de las inversiones y la generación de instrumentos para controlar los efectos macroeconómicos de la bonanza minera y petrolera en Colombia (Gutiérrez y Zuluaga, 2011: 107).

La política económica de confianza inversionista, se fundamenta en la atracción a la inversión de grandes capitales extranjeros en la exploración y explotación de los recursos minero-energéticos. El proceso de erradicación de los cultivos ilícitos, de desmovilización de grupos paramilitares y el “nuevo” surgimiento de bandas criminales, está encontrando en el modus operandi de las multinacionales de minería a gran escala, de megaminería a cielo abierto, un nuevo centro de alianzas entre actores del capitalismo financiero transnacional con políticos, empresarios y grupos ilegales locales, con el fin de extraer los recursos naturales no renovables de Colombia, lo que representa un incentivo selectivo de gran rubro económico.

La distribución y regulación de las regalías mineras y la captura de rentas de los territorios de exploración y explotación petrolera están directamente asociadas al cambio del sistema político en Colombia. Los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, dominantes en las regiones de tradición de cultivo de café para exportación y los centros urbanos con mediana

industrialización, en los últimos años dieron paso al surgimiento de nuevos movimientos políticos que se están posicionando en las regiones mineras: Cambio Radical, el Partido de la Unidad Nacional y Alas Equipo Colombia, entre otros. Por esto, las alianzas partidarias del “Gran pacto de unidad nacional” que propuso Álvaro Uribe durante sus dos periodos de gobierno y que es línea de continuidad en el proyecto político de la “Unidad Nacional” del actual presidente Juan Manuel Santos, cumplen el papel de articulación de los intereses económicos puestos en juego en la recomposición de las clases dominantes de Colombia.

En esta reconfiguración las contradicciones internas, están haciendo evidente la disputa por la conducción del proyecto político hegemónico. Según los acontecimientos recientes, es posible decir que Colombia se encuentra ante un renovado surgimiento del enfrentamiento entre las tendencias más conservadoras con intereses en los negocios agroindustriales a gran escala de biocombustibles y cereales transgénicos; las tendencias más liberales de industrialización, modernización, apertura económica y libre comercio que están delineando los incentivos al capital extranjero; y una nueva hibridación de intereses regionales por nuevos movimientos políticos y actores armados ilegales por el control territorial político-económico de las zonas mineras.

Por consiguiente, los cambios que se vienen presentando en la reglamentación del sistema de partidos y sistema electoral, evidencia que la función del Estado esta puesta al servicio de los personalismos dirigentes de los partidos políticos en el poder local, regional y nacional. La Reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas, tuvo como principal propósito consolidar un sistema de organización política permanente mediante la implementación de la lista única por partidos, el umbral y la cifra repartidora, sin embargo como lo señala Alejo Vargas, esta reforma

[sigue] manteniendo la financiación mixta de campañas, un umbral bajo (2%) y un remanente del personalismo en la política, [dado que] el voto preferente [...] permite a partidos creados de apuro mantener su precaria unidad. [A la vez que los] dos partidos tradicionales se mantienen, el Conservador como parte fundamental de la coalición que sostiene al gobierno, junto con el Partido de la U y Cambio Radical (partido que se desprende del Liberal pero que al final del segundo mandato de Uribe se aleja por no compartir la propuesta de una segunda reelección). A ellos se suman algunos partidos menores que fueron fuertemente afectados por los procesos de la denominada «parapolítica», es decir las relaciones de dirigentes políticos con miembros de grupos paramilitares y narcotraficantes (Vargas, 2011: 126-127).

Los partidos beneficiados de la Reforma política, son los mismos partidos de la coalición de gobierno, aunque en los resultados de las elecciones parlamentarias de 2010 la mayor pérdida de curules fue para el partido Cambio Radical que disminuyó de quince senadores en el 2006 a ocho en el año 2010, el único partido que mantiene oposición al gobierno nacional el Polo Democrático Alternativo pasó de diez a ocho senadores. La coalición de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, logra en su proyecto de la “Unidad Nacional” sumar al Partido Liberal que se había mantenido en oposición al “Gran pacto de unidad nacional” del ex-presidente Álvaro Uribe.

En la consideración que hace Alejo Vargas, el presidente Juan Manuel Santos “ha creado un escenario de mayor tranquilidad en la vida política y social y muestra que un jefe de Estado no se puede rebajar a la

condición de «peleador callejero» porque él encarna la unidad de la Nación” (Vargas, 2011: 129), apreciación amable, para el juego de intereses político-económicos que está cosechando el ex ministro de defensa, ejecutor directo de la política de Seguridad Democrática durante el periodo 2006-2009, periodo en que, según el informe de Medicina Legal de año 2010, se reportaron 38 mil 255 personas desaparecidas.

Es en el gobierno representado por el presidente Juan Manuel Santos, donde se están llevando a cabo las políticas del país minero-cocalero. Por más de cuatro décadas, se ha financiado el conflicto político, social y armado de Colombia con los activos, por un lado de los cultivos ilícitos, y por otro de la financiación de la política contra las drogas. En este gobierno se está tramitando en la Congreso de la República el segundo debate del proyecto de ley para despenalizar el cultivo de la hoja de coca³; el país minero hoy está firmando los proyectos de exploración y explotación de megaminería a cielo abierto más grandes de su historia; el país minero-cocalero, en el régimen de capitalismo financiero transnacional afirma un modelo agro minero exportador, una política económica que retorna al modelo económico primario exportador, dependiente de la inversión del capital extranjero. Estas políticas económicas están orientando la reinserción internacional del país, en las relaciones comerciales del país, entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y están caminando los acercamientos a relaciones comerciales con los gigantes asiáticos, China e India, como crecientes demandantes de materias primas.

La coalición partidaria del proyecto de la “Unidad Nacional” no sólo es momentánea para las elecciones, está proyectada para mantener en el poder la reconfiguración del bloque hegemónico de poder en Colombia, en un momento en que las clases dominantes están en un relevo generacional de liderazgos y en una modificación de las vocaciones empresariales y productivas del país. La supuesta división entre “santistas” y “uribistas”, resulta ser una estrategia que logra confundir el problema de fondo, la disputa de unas clases sociales dominantes movidas por los intereses económicos y políticos que están en juego, y unas alternativas sociales y políticas que están desmantelando la dinámica política tradicional de Colombia por medio de las demandas de los movimientos sociales y la organización de “terceras fuerzas” partidarias.

Las alternativas a los partidos de la “Unidad Nacional”

Los partidos tradicionales en los comienzos del siglo XXI en Colombia pasaron de un fraccionamiento interno a una fragmentación que produjo la creación de nuevos movimientos políticos. Las bases urbanas del Partido Liberal y las bases rurales del Partido Conservador han tomado otras banderas. Los dirigentes han asumido la carrera de empresarios profesionales electorales, ejerciendo la conducción de los partidos que pasaron el umbral de votación exigido en la Reforma política después de las elecciones del año 2006, los cuales fueron: el Partido Social de la Unidad Nacional; el Partido Cambio Radical; el

³ ABOLEDA, Ángela (2012) *Despenalización de los cultivos de coca avanza en el Congreso de la República*. Mayo 9, Wradio.com.co, Disponible en: <http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/despenalizacion-de-los-cultivos-de-coca-avanza-en-el-congreso-de-la-republica/20120509/nota/1685336.aspx>

Partido Convergencia Ciudadana; el Movimiento Alas Equipo Colombia; el Movimiento Apertura Liberal; el Partido Colombia Democrática y el Movimiento Colombia Viva.

Para las elecciones parlamentarias del año 2010 la reacomodación de los renovados personalismos de la política tradicional colombiana, quedaron configurados en el Partido Social de la Unidad Nacional y el Partido Conservador que aumentaron su representación en el congreso; el Partido Liberal que mantuvo su votación y el Partido Cambio Radical que perdió participación parlamentaria. En estas elecciones se quedaron sin personería jurídica los movimientos: Alas-Equipo Colombia, Colombia Democrática, Colombia Viva y Convergencia Ciudadana. Todos estos, relacionados con sectores del narcotráfico y de vínculos con la parapolítica (escándalo político que vinculó a 68 congresistas de la coalición de gobierno nacional con grupos paramilitares). Estos últimos, fueron reagrupados en nuevos liderazgos conformando el Partido de Integración Nacional, PIN, que logró obtener nueve curules en el Senado.

Otros movimientos han tomado la vocería de segmentos poblacionales específicos, el Movimiento Político MIRA de tendencia social cristiana; el Partido Opción Centro que toma en el año 2005 la personería jurídica del Partido Alianza Democrática M-19, y en el año 2007 se constituye en el partido ambientalista de Colombia, denominándose Partido Verde Opción Centro, para, el año 2009, cambiar sus estatutos, mientras que sus líderes pasan a ser los ex alcaldes de Bogotá Luis Eduardo Garzón, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, contagiando la ola verde que lanzó la candidatura presidencial de Antanas Mockus a las elecciones presidenciales del año 2010, disputando en segunda vuelta con el electo presidente Juan Manuel Santos. Por circunscripción indígena tienen personería jurídica el Movimiento Alianza Social Indígena y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia; por circunscripción especial de negritudes en el año 2006 quedaron representados el Movimiento Alianza Social Afrocolombiana y el Movimiento Político “AFROUNINNCA”, situación que cambió en las elecciones de 2010, quedando por esta circunscripción el Movimiento Afrovides y el Movimiento Popular Unido.

Las facciones, fracciones y fragmentaciones de la izquierda colombiana lograron en el año 2006 conformar la coalición política del Polo Democrático Alternativo bajo la exigencia de la Reforma Política de unificar a los partidos políticos con la amenaza de pérdida de personería jurídica sino se cumple con un umbral de votación, correspondiente al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional. Así, bajo el “Ideario de Unidad” se integró el Polo Democrático Independiente y a las fuerzas que componían la coalición Alternativa Democrática (Frente Social y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete), el fruto de esta unión se reflejó en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006, donde el Polo Democrático Alternativo logró convertirse en el partido de izquierda con mayores logros electorales de la historia del país.

La candidatura presidencial por el Polo Democrático Alternativo de Carlos Gaviria Díaz obtuvo la segunda votación con el 22.02% (2.613.157 de votos), frente a la candidatura de reelección de la coalición del “Gran pacto de la Unidad Nacional” de Álvaro Uribe que obtuvo el 62.35% (7.397.835 de votos) en un total de 12.058.788 de votantes. Estas elecciones representan a 42 millones de habitantes (según el Censo Nacional del año 2005) de los cuales, el potencial equivale a 26.731.700 de ciudadanos, por tanto la abstención electoral en el año 2006 fue del 55% de la población aptos para votar, esto es,

14.672.912 de colombianos continúan demostrando la tendencia progresiva de deslegitimación del sistema político colombiano producto del clientelismo del Frente Nacional (Cifras tomadas de la Registraduría General de la Nación).

Esta situación, conservando sus márgenes, se mantiene en las elecciones de autoridades locales. En el año 2007 el Polo Democrático Alternativo con la candidatura de Antonio Navarro Wolf, obtuvo la Gobernación del departamento de Nariño con una votación de 284,035 votos; frente a un potencial electoral de 902,717. El total de votantes en esas elecciones fue de 573,196, esto es, una abstención de 27.50%. En la alcaldía del Distrito Capital de Bogotá, fue electa por el Polo Democrático Alternativo la candidatura de Samuel Moreno Rojas, con una votación de 920,013 votos, frente a un potencial de 4.378.026, una asistencia a las urnas de 2.093.855 ciudadanos y una abstención del 53.17%.

En este proceso de unificación de la izquierda colombiana las tendencias internas fueron catalogadas en la prensa del país como 'ala moderada', 'bloque centro' y los 'no alineados'. Los liderazgos personalistas constituyeron el 'ala moderada' en la representación de Gustavo Petro, Jorge Guevara, Luis Carlos Avellaneda y Gloria Flórez; en el 'bloque de centro' actuaron Carlos Bula, Jaime Dussán, Carlos Romero, Clara López y la Alianza Nacional Popular en representación de Iván Moreno Rojas y el ex-alcalde Samuel Moreno Rojas; en los 'no alineados' sobresalieron Jorge Robledo, Gloria Inés Ramírez y Gloria Cuartas. En el año 2008 se llevaron a cabo las elecciones de consulta interna para elección de 500 delegados al Segundo Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo con una votación total de 571.873 ciudadanos divididos en 88 listas que representaron un número no contabilizado de micro-tendencias.

Las alternativas sociales y políticas a la coalición de gobierno del “Gran pacto de la unidad nacional”, fueron convocadas a participar en estas elecciones del Segundo Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo; con el propósito de ser avalados para participar en las elecciones parlamentarias del año 2010. La posibilidad de innovación política por nuevas organizaciones y nuevos liderazgos, en el sentido que Panebianco otorgó a la necesidad de surgimiento de “fuerzas «auténticamente revolucionarias»”, si dio por el ingreso de dos nuevos procesos: el Movimiento Nacional de Víctimas – MOVICE, que agrupó en la figura de Iván Cepeda (electo a la Cámara de Representantes de Bogotá, 2010-2014) a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a organizaciones sociales y comunitarias y a una parte de la intelectualidad crítica del país; y por el ingreso del Colectivo Vamos Independientes con la vocería de Camilo Romero (aspirante a la Cámara de Representantes de Bogotá en el año 2002 por el Movimiento Político Tienen Huevo, y electo al Senado de la República, 2010-2014), apoyado por una mayoritaria población joven proveniente de organizaciones independientes; por medios de comunicación alternativa, y medios de opinión y humor político; y un encuentro generacional con liderazgos sociales y políticos locales principalmente de los departamentos de Nariño, Tolima, Sucre, la Guajira y una representación en el Distrito Capital de Bogotá.

Este proceso de integración de la izquierda democrática de Colombia, ha sufrido en los últimos dos años una división que está terminando en la creación de tres frentes. Los hechos ocurridos al interior de la coalición del Polo Democrático Alternativo en la administración de la ciudad de Bogotá en el año 2011, tuvieron repercusión en la esperanza de la “franja amarilla”, por lo concerniente a la suspensión de la

condición de congresista del ex-Senador Néstor Iván Moreno Rojas y la suspensión disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación en contra del entonces alcalde de Bogotá Samuel Gustavo Moreno Rojas. Estos hechos significaron un efecto negativo en la ciudad y en el país para la imagen del Polo Democrático Alternativo, lo cual fue demostrado en las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011.

La frustración y deslegitimación de un proyecto de oposición, declarado progresista y de izquierda en Colombia, dio como resultado la ruptura de quienes se habían reconocido en el 'ala moderada', creando el Movimiento Político Progresistas, con el cual la candidatura de Gustavo Petro obtuvo la alcaldía de Bogotá, manteniendo un legado de los militantes del Polo Democrático en su administración y renovando el hacer político de los voceros de la llamada “izquierda democrática” de Colombia.

Por otra parte, un sector que hizo parte de los 'no alineados', la denominada izquierda radical, ha emprendido rumbo hacia el nuevo Movimiento Político Marcha Patriótica. La creación de este movimiento en los días 21, 22 y 23 de abril del año 2012 convocado por 1700 organizaciones sociales, es representado por un Comité Patriótico Nacional, con 23 miembros que designaron cuatro vocerías oficiales representadas por: David Flórez (líder estudiantil); Andrés Gil (miembro de la Organización Campesina del Valle del Río Cimitarra); Carlos Lozano (director del Semanario Voz y miembro del comité central del Partido Comunista Colombiano); y la representación de la disidencia del Partido Liberal Colombiano por parte de la ex-congresista Piedad Córdoba.

Los procesos de movimientos sociales en Colombia, articulan un gran número de organizaciones de la sociedad civil, por un lado, organizaciones de hijos e hijas y familiares de las víctimas del genocidio político de la Unión Patriótica quienes decidieron no participar de procesos electorales; y de líderes que tras los procesos de desmovilización de los años noventa no han encontrado en las representaciones políticas partidarias una expresión de cambio. Por otro, organizaciones que tras el legado del movimiento altermundista desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional-EZLN en 1994, en su propuesta de cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo sistematizan John Holloway (2002) y Eric Hosbawm (2011); la creación del Foro Social Mundial en Porto Alegre, 2001, que transmite en su Carta de Principios una ruptura con las organizaciones partidarias; entre otros movimientos sociales que inspirados en las Redes Globales de Resistencia han llevado a cabo acciones colectivas, sin vocación de toma del poder del Estado.

Por consiguiente, el balance de la participación de las alternativas sociales y políticas de Colombia, en la disputa por el poder político en las próximas elecciones, esta puesto en las dificultades político-organizativas que ha demostrado tener la izquierda democrática para competir en las reglas de juego del sistema de partidos y el sistema electoral direccionadas por el gobierno nacional a través de las instituciones del Estado colombiano; y en las posibilidades de cambiar la concepción de dos décadas de movilización antipartidista y antielectoral de los movimientos sociales. Los últimos resultados en elecciones de autoridades locales del año 2011, dan una tendencia en caída de la cantidad de votación por el Polo Democrático Alternativo, único partido de oposición a la coalición de gobierno de la “Unidad Nacional” en representación del presidente Juan Manuel Santos. De 1.368.618 votos por alcaldías municipales en el año 2007 se pasó a 282.292 de votos en el año 2011. La siguiente gráfica lo puede ilustrar:



Estadística, Votación por Partidos Alcaldía. Tomado de: Escrutinios, 2011, Registraduría Nacional, Colombia.

La división en tres frentes de los movimientos y partidos políticos de la izquierda democrática en Colombia, a saber, el Polo Democrático Alternativo; el Movimiento Político Progresistas; y el Movimiento Político Marcha Patriótica, deja pensar que hay una alta posibilidad de que estos puedan quedarse sin representación política en las próximas elecciones parlamentarias del año 2014, según la tendencia electoral registrada.

En la reiteración de la referencia a que la Reforma Política del año 2003, exige un umbral superior al dos por ciento (%) del total de votos. Esto supone que en el caso de que la división persista, cada uno de estos frentes debe cumplir con el requisito exigido por las autoridades electorales para que les sea otorgada la personería jurídica y por ende las curules en disputa para elegir representación ante el Congreso de la República, y en una proyección mayor, un candidato a las elecciones presidenciales.

En una reciente entrevista que le hicieron a Clara López, actual presidenta del Polo Democrático Alternativo, manifestó que “Lo que tiene futuro en Colombia es la confluencia de todos los sectores de izquierda”; por su parte Antonio Navarro, ex-secretario de gobierno de la Alcaldía de Bogotá y vocero del Movimiento Político Progresistas, declaró que “Un frente amplio de izquierda puede ganar en el 2014”, por su parte en la “Gran movilización por la paz” que se llevó en Villa Rica el pasado 10 de mayo, se registraron fotografías de cercanía entre Antonio Navarro, Piedad Córdoba e Iván Cepeda, lo cual puede indicar que la una coalición político de centro-izquierda sea posible para las próximas jornadas electorales.^{4iv}

⁴ Para ampliar las manifestaciones, declaraciones e imágenes que indican una coalición de centro-izquierda en Colombia para las elecciones en el 2014 ver los siguientes artículos: Proclama.tutierra.net (2012) *Villa Rica se prepara para recibir gran movilización por la paz*, Jueves, 10 de Mayo. Disponible en: http://www.proclama.tutierra.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6912:villa-rica-se-prepara-para-recibir-gran-movilizacion-por-la-paz&catid=19:noticiassucesos&Itemid=56. VALENCIA, León (2012) “Lo que tiene futuro en Colombia es la confluencia de todos los sectores de izquierda”, afirma presidenta del Polo. 20 de Abril. Fundación Nuevo Arco Iris. Disponible en:

Apuntes finales

Las alianzas dominantes en el bloque hegemónico colombiano, se tejen entre el sistema de partidos tradicional, el poder político y el poder económico, configurando una forma de régimen político que ha mantenido en el poder a una clase social propietaria, terrateniente y empresaria industrial, por medio de la interconexión de redes familiares, redes de negocios y zonas grises de poder con grupos paramilitares. Mientras tanto, las alternativas sociales y políticas de la última década, enfrentan los problemas de pobreza; desigualdad; exclusión política, social y económica; y una campaña masiva de estigmatización para ligar a la izquierda democrática con los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN. Apostar a una transformación de la tradición política, requiere preparar a los nuevos liderazgos para el reto de llevar a cabo el relevo generacional de una nueva cultura política.

La sociedad civil en Colombia, está apostando a modificar la tendencia de los últimos cuarenta años de abstención electoral y separación de los movimientos sociales y de los ciudadanos independientes de la disputa política electoral. El reto está en articular las consignas de movilización, denuncia y resistencia; con las de transformación, vocación de poder y disputa electoral para la toma del poder del Estado. La relación [Sociedad Civil] -[Partidos Políticos] -[Estado], pasa también por un momento decisivo para que el gobierno nacional demuestre las garantías de participación democrática y la no repetición de la historia de violencia política en Colombia.

Por tanto, el momento que vive Colombia en la actualidad, bajo un gobierno que ha manifestado en su Plan de Desarrollo Prosperidad Para Todos (2010-2014) “establecer un gobierno de Tercera Vía que se resume en un principio fundamental: *el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario*” (DNP, 2011: 24), supone, a las iniciativas de movimientos y partidos políticos claridad de las dificultades que atraviesan y afirmación de vocación de poder político, para lograr ser alternativa a la reconfiguración del bloque hegemónico de poder sustentado en las políticas de “seguridad democrática” y “confianza inversionista” para el mantenimiento de la política tradicional en el poder del Estado.

De no ser así, la dinámica de resistencia de los movimientos sociales podría seguir en la reivindicación de formas de vida dignas para todos y todas, y en la denuncia a las violaciones de derechos humanos, con el auspicio de los fondos de Cooperación Internacional, motivados por las Redes de Resistencia Global, por la voluntad de profesionales, empresarios o académicos que comprenden la situación de represión pero que no ofrecen posibilidades concretas de transformación de la realidad. La toma del poder del Estado, para ejercer un control político al modelo económico dominante, es un camino en marcha en América Latina, que si bien tiene tropiezos y errores, estos deben ser estudiados en forma crítica y propositiva, para plantear salidas a la realización de ese otro mundo posible que soñamos.

http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2429:lo-que-tiene-futuro-en-colombiaes-la-confluencia-de-todos-los-sectores-de-izquierda-afirma-presidenta-del-polo&catid=75:noticias&Itemid=66. ARCO IRIS (2012) “Un frente amplio de izquierda puede ganar en el 2014”: Antonio Navarro. 1 de Mayo. Fundación Nuevo Arco Iris. Disponible en: <http://www.arcoiris.com.co/2012/05/un-frente-amplio-de-izquierda-puede-ganar-en-el-2014antonio-navarro/>

Bibliografía

- ARCHILA NEIRA, Mauricio (2005) *Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990*. Bogotá: ICANH y CINEP, 2005.
- GUTIERREZ SANÍN, Francisco (2007) *¿Lo Que el Viento Se Llevó? Los Partidos Políticos y la Democracia en Colombia 1958-2002*. Colombia: Editorial Norma.
- GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco; ZULUAGA BORRERO, Paula (2011) *Hacia un país minero: retos para el sistema político y el Estado*. Nueva Sociedad 231. Enero-Febrero. Disponible en: www.nuso.org
- GIRALDO, Fernando (2007) *Partidos y Sistema de Partidos en Colombia*. En: RONCAGLIOLO, Rafael; MELÉNDEZ, Carlos. *La política por dentro Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos*. Perú: Ágora democrática; International idea; y la Asociación Civil Transparencia.
- HOLLOWAY, John (2002) *Cambiar el mundo sin tomar el poder*. España: Editorial El viejo topo.
- HOSBAWM, Eric (2011) *Cómo cambiar el mundo*. Barcelona: Crítica. MANIN, Bernard (1992); *Metamorfosis de la representación*. En: Dos Santos, Mario (Comp.) *¿Qué queda de la representación política?*, Caracas: Nueva Sociedad.
- MAIR, Peter; y KATZ, Richard (1997) *Organización partidaria y la emergencia del partido cartel*. Capítulo 5 del libro de Peter Mair, “Party System Change”. Traducción a cargo de Luciana Cingolani y Ulises Pallares. Inglaterra: Oxford University Press.
- NOHLEN, Dieter (1994) *Sistemas electorales y partidos políticos. Cap. III. Sistemas electorales y sistemas de partidos políticos: una introducción al problema con carácter orientador*. México: UNAM.
- OFFE, Claus (1996) *Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional*. En: Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales. Madrid, España: Editorial Sistema.
- PANEBIANCO, Ángel (1995) *Modelos de Partido. Organización y poder en los partidos políticos*. Madrid: Alianza Editorial.
- PIZARRO LÉONGOMÉZ, Eduardo (2002) *La Atomización Partidista en Colombia: el Fenómeno de las Micro-empresas Electorales*. Workig Paper, 292. Kellogg Institute for International Studies.

ROLL, David (2002) *Rojo difuso y azul pálido. Los partidos tradicionales en Colombia: entre el debilitamiento y la persistencia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales.

SÁNCHEZ ÁNGEL, Ricardo (2005) *Bonapartismo presidencial en Colombia*. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Uniediciones.

UNGAR BLEIR, Elizabeth; ARÉVALO, Carlos Arturo (2004) *Partidos y Sistema de Partidos en Colombia Hoy: ¿Crisis o reordenación institucional?* En: KORNBLITH, Miriam; MAYORGA, René Antonio; PACHECO, Simón; y otros. *Partidos Políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio*. Perú: Ágora democrática -Internacional IDEA.

TCACH, César (1993) *En torno al “CATCH ALL PARTY” Latinoamericano*. En: GARRETÓN, Manuel Antonio (Editor) *Los partidos y la transformación política de América Latina*. Grupo de Trabajo Partidos Políticos CLACSO. Chile: Ediciones Flacso-Chile; Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo (2011) *El sistema político colombiano al inicio del gobierno de Santos*. Nueva Sociedad 231. Enero-Febrero. Disponible en: www.nuso.org